

## Reflexiones sobre la violencia

*El poder corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la violencia. La violencia es, por naturaleza, instrumental; como todos los medios siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin que persigue. Y lo que necesita justificación por algo, no puede ser la esencia de nada. Hannah Arendt.*

Día a día, son alarmantes las cifras que sobre asesinatos, asaltos, violaciones y accidentes de tránsito presentan, a veces de un modo exageradamente amarillista, los medios de comunicación del país. No hay lugar seguro en El Salvador; las calles y avenidas, los parques, la propia residencia y el lugar de trabajo se han convertido en zonas de peligro. Estamos ante una situación de violencia social sumamente extrema que se ha vuelto preocupante y que no da visos de tener solución en el corto o mediano plazo. Más aún, el clima prevaleciente ha llevado a que algunos hablen incluso de una "guerra informal" entre los salvadoreños, la cual genera mayores costos en vidas humanas por año que la confrontación militar que vivió nuestro país hasta la firma de los acuerdos de paz. Una aproximación fenoménica al problema pone de manifiesto que las relaciones cotidianas que cada uno establece con los demás están insertas en un "clima de violencia", que las moldea y les imprime una dirección precisa: *imponer al otro el poder de que se dispone, porque la "amenaza" de que suceda lo contrario está siempre presente.*

El ejemplo más paradigmático de lo que afirmamos lo constituyen los buseros y microbuseros, quienes imponen el poder que les concede conducir un automotor sobre los usuarios, los demás au-

tomovilistas y los transeúntes que a diario se desplazan por las calles y avenidas del país. Pero ese ejercicio de la cuota de poder que se posee sobre los otros no es patrimonio exclusivo de buseros y microbuseros, aunque en éstos sea más notable, tanto por el desorden que provocan como por las consecuencias, muchas veces mortales, de sus acciones. De la misma forma, usan el poder de que disponen empleados estatales, pagadores de instituciones públicas y privadas, vigilantes, profesores y abogados. En cada uno de estos casos, a los cuales se podrían añadir muchos más, los otros tienen que saber que *dependen* de la voluntad y de los deseos del empleado estatal para realizar exitosamente un trámite, que *dependen* del pagador para recibir a tiempo su cheque, que *dependen* del vigilante para tener acceso a una institución pública o privada, que *dependen* del profesor para aprobar el curso y que *dependen* del abogado para sacar adelante un trámite legal.

Ahora bien, es indudable que en las relaciones sociales se generan relaciones de dependencia entre los sujetos no en razón de su voluntad, sino en razón de las jerarquías impuestas por la propia estructura social. Asimismo, las relaciones sociales son relaciones de poder, es decir, son relaciones en las que los sujetos que interactúan van cargados con una serie de posesiones —su propio cuerpo,

su saber, su tradición familiar, sus recursos económicos y políticos— que no sólo entran en juego en dicha interacción, sino que pueden marcar diferencias sustantivas entre los individuos. En otras palabras, el ejercicio del poder y la dependencia de unos individuos respecto de otros son elementos ineludibles en las relaciones sociales; poseen una objetividad que se deriva de la estructura social y de las jerarquías que la misma impone.

Las relaciones de dependencia y poder que se establecen no son idénticas en todos los casos. Estas varían y son tan diversas según sea el capital simbólico y material de los individuos y los grupos, el espacio en el cual éstos interactúan y el rol desempeñado en una determinada situación.

En lo que atañe al capital simbólico y material, una cosa es la relación de dependencia y poder manifiesta en el comportamiento de un empresario (que posee la mayor cuota de capital simbólico y material) ante el personal de producción de su fábrica (que posee la menor cuota de poder simbólico y material) que ante el personal técnico o secretarial (que posee, por así decirlo, un capital simbólico y material “superior” al de los obreros). Asimismo, el comportamiento del empresario es distinto si se trata de una corporación de la cual él es el accionista mayor. Las relaciones de dependencia y poder entre los accionistas minoritarios y el personal técnico y los obreros, o en el interior de estos dos últimos grupos de trabajadores son también diferentes.

El espacio de interacción entre los actores sociales influye decisivamente en las relaciones de dependencia y poder. Más aún, es un espacio de poder en el que, además, cristalizan determinadas relaciones de dependencia. Para seguir con el ejemplo anterior, uno es el espacio financiero, en el y desde el cual los accionistas “dominan” al conjunto de actores que se desenvuelven en el espacio global de la empresa; otro es el espacio de la producción, “dominado” por los técnicos; otro es el espacio de las relaciones públicas, dominado por los ejecutivos (o ejecutivas); otro es el espacio de la seguridad, dominado por sus guardianes; finalmente, está el espacio de la maquinaria, “dominado” por el obrero.

Ciertamente, el capital simbólico y material hace posible que los actores puedan ocupar un espacio determinado. Asimismo, estos actores ocupan, de hecho, espacios distintos en razón de que

el capital simbólico y material está distribuido desigualmente en la sociedad. Pero ese espacio no se “ocupa” de cualquier forma: se hace a partir de un rol determinado, que exige un ejercicio específico del poder simbólico y material, el cual se posee en el contexto del espacio ocupado. Es decir, el rol asumido en cada caso —y los roles que un actor puede y debe asumir son tan diversos como diversas son sus relaciones intersubjetivas—, no sólo se asume en un espacio determinado, sino que moldea la utilización del capital simbólico y material propio de cada actor social.

En definitiva, las relaciones sociales no sólo son relaciones en las que interactúan actores con un capital material y simbólico desigual, sino que las mismas se establecen en espacios determinados, en los cuales los actores asumen roles también determinados, los cuales pueden ser desempeñados en razón del capital simbólico y material que se posee, pero que decantan el modo cómo puede y debe ser utilizado ese capital. Asimismo, en una sociedad determinada, las diferencias de capital simbólico y material de cada uno de los actores sociales —y de los grupos de actores entre sí— y los distintos espacios que las mismas les permiten ocupar y dominar, asumiendo determinados roles, dan lugar a una jerarquización social, cuya objetividad es indudable. Es decir, dan lugar a una estructuración objetiva de las relaciones sociales como relaciones de dependencia entre unos actores y otros —entre unos grupos y otros—, en las cuales las diferencias de capital simbólico y material posibilitan el “dominio” de unos actores y grupos sobre otros, lo cual es legitimado a través de los diferentes *status* establecidos en la jerarquía de la sociedad.

Aquí, insistimos, se trata de una desigualdad objetiva, generada por la misma dinámica de la sociedad. Se trata también de un dominio —y por lo tanto de un ejercicio del poder— de unos actores y grupos sobre otros que no depende de la voluntad de éstos, sino que viene exigido por la misma estructuración social. Se trata también, finalmente, de un ejercicio del poder que no va sólo de las “clases dominantes” a las subalternas, sino que permea los poros de la sociedad: todos los individuos, por muy marginal que sea su condición de clase, poseen un capital material y simbólico y ejercen algún tipo de dominio en el espacio que les corresponde, en el cual, por supuesto, desempeñan un rol determinado.

Dicho lo anterior, ¿qué sucede en la sociedad salvadoreña de postguerra? Pues bien, en El Salvador, como en cualquier otra sociedad segmentada por razones estructurales, hay una distribución desigual del capital simbólico y material entre los individuos y los grupos. Hay también diversas relaciones de dependencia entre éstos, las cuales se establecen en espacios determinados, “dominados” por individuos y grupos en razón del capital simbólico y material que les es propio y según los requerimientos específicos del rol desempeñado. Hasta aquí, pues, estamos ante unas relaciones de poder y de dependencia entre los individuos y los grupos que conforman nuestra sociedad, cuya objetividad no puede ser negada.

Pero en El Salvador de postguerra no basta con eso. En efecto, individuos y grupos, en los distintos espacios en los cuales están en condiciones para ejercer el poder que poseen, no sólo lo ejercen de hecho, sino que lo reafirman de un modo sumamente exacerbado, lo cual llega hasta límites verdaderamente patológicos. Es decir, el Otro debe saber que está en manos del que domina la situación y, además, que no puede hacer nada para revertirla. Y quien domina la situación —el espacio de que se trate— se las arregla para que los dominados en ese espacio asuman que eso es ineludiblemente así. Hay, pues, una reafirmación del poder que ya objetivamente se tiene; y esa reafirmación camina muchas veces por el ejercicio de la violencia, la cual puede alcanzar niveles de terrorismo, como lo muestran los cadáveres de los dos adolescentes ahorcados en Quezaltepeque: sus asesinos no sólo terminaron con sus vidas, sino que dieron un sentido “ejemplarizante” a su acción.

Buseros y microbuseros también reafirman violentamente el poder que les da conducir un vehículo automotor: en el interior de la unidad de transporte maltratan a los usuarios, en las calles y avenidas, conduciendo a excesiva velocidad, desplazan a quien se interpone en su camino, haciendo sentir violentamente su dominio sobre el espacio vehicular. Pero esta reafirmación patológica del poder —patológica porque necesita de la violencia para imponerse— permea los poros de nuestra sociedad y se desprende, como en un efec-



to de cascada, del ejercicio del poder que caracteriza a las élites dominantes en el país.

En efecto, nuestras élites no sólo detentan objetivamente el poder económico y político, sino que lo reafirman —necesitan reafirmarlo— violentamente. Esta violencia alimenta la violencia cotidiana de nuestra sociedad y, además, necesita de ella para legitimarse y autorreproducirse. La pregunta que se impone, entonces, es por qué ello es así.

Las hipótesis que pueden aventurarse son muchas, pero entre ellas no puede dejar de mencionarse aquella que alude a cómo el ejercicio del poder de nuestras élites políticas y económicas ha carecido históricamente de una base de sustentación simbólica, lo cual no les ha permitido —en la terminología gramsciana— “dirigir” la sociedad, aunque sí “dominarla”. Es decir, la fuerza ha sido, desde siempre, el complemento de un poder que objetivamente se ha poseído, pero que se ha sabido no aceptado por quienes están excluidos de él. Y, en cuanto se sabe no aceptado, se cree siempre en peligro, siempre tambaleante, siempre desafiado y, en consecuencia, siempre necesitado de un recurso que “recuerde” a los dominados quiénes son los que de hecho mandan. Ese recurso ha sido la violencia en sus diversas manifestaciones, la cual se puede ejercer si se tiene el poder económico y político.

Y es que no cabe duda de que la legitimidad es necesaria para conducir una sociedad; sin legitimidad el único recurso que queda es la fuerza. En El Salvador, esa legitimidad ha faltado desde siempre y, desde siempre, la fuerza ha jugado un papel de-

cisivo en el ejercicio del poder político y económico. Por supuesto, la legitimidad no se consigue de la noche a la mañana, sino que obedece a un largo proceso de índole cultural, el cual se sostiene no sólo en el "compromiso histórico" de las élites dirigentes con las clases subalternas, sino también en los referentes simbólicos que ese compromiso es capaz de generar.

En nuestro país, los grupos dominantes han sido incapaces, quizás por su voracidad, de comprometerse con el bienestar de los sectores populares. Estos últimos han sido vistos, desde la cima del poder político-económico, como personas de segunda o tercera categoría, como recurso de explotación y, por supuesto, como resentidos y siempre dispuestos al robo, al vandalismo y al desorden. La prepotencia y la matonería se han propagado desde los círculos del poder como el único mecanismo válido para tratar con un pueblo de tan baja condición. La violencia ha sido el complemento "natural" de un poder económico-político que no requiere ser aceptado y reconocido por unos ciudadanos inexistentes, es decir, que no necesita de una legitimidad cuyos valores sean el consenso, el respeto y la tolerancia, porque basta y sobra con la pistola al cinto, un juego de cadenas de oro al cuello, un buen fajo de billetes en la cartera y un par de matones armados de compañía.

La violencia de los poderosos ha generado un simbolismo que, por sí mismo, basta para saber quién es el dominado y quién el dominador. Ese simbolismo se ha difundido al conjunto de nuestra sociedad y, de algún modo, todos los salvadoreños necesitamos de un símbolo derivado de nuestras élites para sentirnos dueños de la situación y por encima de los demás. La cultura de la violencia es

propia de la sociedad salvadoreña, pero el fenómeno ni es nuevo ni obedece a un *fatum* natural ni es patrimonio de los sectores populares. Pensar que la cultura de la violencia es exclusiva de la postguerra es desconocer uno de los rasgos esenciales del ejercicio del poder, que ha caracterizado históricamente a las élites del país; creer que los salvadoreños estamos condenados a vivir *ad eternum* en la violencia es desconocer —y no preocuparse por entender— las raíces históricas del problema; pensar que la violencia es patrimonio de los sectores populares es obviar, cínicamente, la violencia que se propaga desde los círculos del poder.

En suma, el problema de la violencia —más allá de las diversas concreciones que la misma pueda adquirir— tiene una dimensión cultural que no se puede eludir. En la sociedad salvadoreña actual son extremadamente débiles los valores y referentes simbólicos que exaltan el respeto al otro, la reciprocidad y la tolerancia. Y están presentes de un modo exacerbado los (anti) valores que exaltan la propotencia, el irrespeto y el sometimiento del otro, la superioridad y la intolerancia. La difusión y vigencia de estos (anti) valores no sólo han tenido (y tienen) un foco importante en los grupos del poder del país, sino que una vez asumidos por grupos sociales más amplios, han reforzado y justificado prácticas autoritarias del más diverso signo. Porque, ¿qué más se puede ofrecer a —y se merece— un pueblo que se irrespeta a sí mismo? ¿No es la violencia el único modo de controlar a un pueblo que no sabe más que aprovecharse del otro, de "ser vivo" y no "dejarse joder"?

**Luis Armando González**